

JUICIO ELECTORAL

EXPEDIENTE: SG-JE-27/2018

ACTORES: CONSEJERA
PRESIDENTA DEL INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR Y
OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ESTATAL
ELECTORAL DE BAJA
CALIFORNIA SUR

MAGISTRADO ELECTORAL:
EUGENIO ISIDRO GERARDO
PARTIDA SÁNCHEZ

SECRETARIA: CHRISTIAN
ANALÍ TEMORES OROZCO

Guadalajara, Jalisco, veintitrés de agosto de dos mil dieciocho.

La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión pública de esta fecha, emite resolución en el sentido de **modificar** la sentencia interlocutoria dictada el seis de agosto pasado, por el Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur en el Incidente de Pretensión de Nuevo Escrutinio y Cómputo, correspondiente al expediente principal TEE-BCS-JI-014/2018, conforme a los razonamientos y consideraciones siguientes:

1. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO

Del escrito de demanda, así como de las constancias que integran el presente juicio, se advierten los siguientes hechos relevantes:

- 1.1. Inicio del Proceso Electoral Local en Baja California Sur.** El uno de diciembre del dos mil diecisiete, dio inicio el proceso electoral local 2017-2018 en Baja California Sur, mediante la instalación del Consejo General¹ del Instituto Estatal Electoral de dicha Entidad para tales efectos.
- 1.2. Jornada Electoral.** El primero de julio de dos mil dieciocho,² se llevó a cabo la Jornada Electoral en el Estado de Baja California Sur, para elegir, entre otros, el Ayuntamiento de Mulegé.
- 1.3. Cómputo Municipal.** El día cuatro de julio, el Consejo Municipal Electoral de Mulegé del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, realizó el Cómputo de la elección de munícipes de Mulegé.
- 1.4. Constancia.** El día cinco de julio, el Consejo Municipal en comento, declaró la validez de la elección de munícipes de Mulegé, Baja California Sur, y extendió la Constancia de mayoría relativa, correspondiente.
- 1.5. Impugnación y Solicitud de Incidente sobre la pretensión de Nuevo Escrutinio y Cómputo.** Mediante escrito presentado ante el Consejo Municipal referido, el diez de julio siguiente, el Partido Acción

¹ De conformidad con el calendario electoral de Baja California Sur para el proceso electoral local 2017-2018, visible en: https://www.ieebcs.org.mx/ple2017-2018/IEEBCS_PLE_2017-2018_CALENDARIO_INTEGRAL.pdf

² En adelante, las fechas citadas corresponden al año dos mil dieciocho, salvo indicación en contrario.

Nacional, promovió demanda en contra de la determinación del citado Consejo Municipal, de no realizar el recuento total de casillas para la elección de Ayuntamiento de Mulegé, Baja California Sur, así como solicitó la apertura del Incidente sobre la Pretensión de Nuevo Escrutinio y Cómputo de dicha elección de munícipes, dentro del expediente TEE-BCS-JI-014/2018.

1.6. Sentencia Interlocutoria (acto impugnado). El seis de agosto, el Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur, dictó Sentencia Interlocutoria dentro del expediente principal TEE-BCS-JI-014/2018, determinando parcialmente fundada la realización de un nuevo escrutinio y cómputo de la votación de cuatro casillas instaladas en el Municipio de Mulegé, Baja California Sur.

2. JUICIO ELECTORAL

2.1. Presentación de la demanda. El nueve de agosto, Rebeca Barrera Amador, María Socorro Villavicencio Rojas, María Herlinda Gutiérrez Osuna, Alma Angelina Colorado Betanzos, Víctor Manuel Ceseña Gerardo y José Cruz Villavicencio Aguilar, quienes se ostentan como Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, Presidenta del Consejo Municipal Electoral de Mulegé, Consejeras y Consejeros Electorales de este último órgano municipal, respectivamente, presentaron ante el Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur,

escrito de demanda de juicio electoral en contra de la resolución señalada en el punto anterior.

- 2.2. Recepción y turno a ponencia.** El catorce de agosto, se recibieron en esta Sala Regional Guadalajara, las constancias relativas al mencionado medio de impugnación, y por acuerdo de esa misma fecha, la Magistrada Presidenta ordenó registrar dicho medio como juicio electoral bajo la clave SG-JE-27/2018 y turnarlo a la ponencia del Magistrado Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez para su sustanciación.³
- 2.3. Radicación.** Por acuerdo de quince de agosto siguiente, el Magistrado Instructor radicó en la ponencia a su cargo el presente juicio electoral.
- 2.4. Admisión y pruebas.** Mediante acuerdo de veintiuno de agosto, se admitió el medio de impugnación, así como se proveyó lo conducente respecto a las pruebas ofertadas por las partes.
- 2.5. Escrito *Amicus Curiae*.** El veintidós de agosto, se recibió vía correo electrónico, escrito *amicus curiae*⁴ presentado por la Red para la Igualdad Sustantiva de Baja California Sur (RMIS), así como se recibió oficio del tribunal responsable, en el que se dio aviso a esta Sala de la presentación ante dicho órgano del citado escrito *amicus curiae*.
- 2.6. Cierre de instrucción.** En su oportunidad, al no existir trámite o diligencia pendiente por desahogar, se

³ Acuerdo que fue cumplimentado por la Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Regional Guadalajara, mediante oficio TEPJF/SG/SGA/5678/2018, de esa misma fecha.

⁴ Amigo del tribunal.

declaró cerrada la instrucción, quedando el expediente en estado de resolución.

3. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco, es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, por razón de materia y territorio, toda vez que en él se impugna la resolución de seis de agosto pasado emitida dentro de un Incidente de Pretensión de Nuevo Escrutinio y Cómputo resuelto por el Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur, Entidad Federativa que forma parte del ámbito territorial donde esta Sala ejerce jurisdicción.⁵

4. PRETENSIONES

De los agravios expuestos por los accionantes, es posible desprender dos pretensiones distintas, a saber:

⁵ Lo anterior, con fundamento en lo establecido en los artículos 17, párrafo segundo, 41, base VI, 94, párrafo primero y 99, párrafos primero, segundo y cuarto, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción II, 184, 185, 186, fracción X, 192, párrafo primero y 195, fracción XIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, párrafos 1 y 2, y 4, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; en relación con el Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2/2017, de nueve de marzo de dos mil diecisiete, *Relativo al Registro y Turno de los Asuntos Presentados ante Las Salas de este Órgano Jurisdiccional*; los *Lineamientos Generales para la Identificación e Integración de Expedientes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación*, emitidos el doce de noviembre de dos mil catorce, por la Magistrada Presidenta de la referida Sala Superior, y notificado en los estrados de la misma, el catorce de noviembre de dos mil catorce; así como Acuerdo INE/CG329/2017, aprobado el veinte de julio de dos mil diecisiete por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que establece el ámbito territorial de las cinco circunscripciones plurinominales y la entidad federativa cabecera de éstas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete.

A) Que se les restituya su derecho de audiencia, pues refieren que como autoridad, no tuvieron la oportunidad de presentar informe circunstanciado respecto a los señalamientos que en vía de alcance realizó el Partido Acción Nacional, pues estos no formaron parte del documento recibido el diez de julio del año en curso, y que sí fue tramitado por la autoridad electoral administrativa responsable; así como señalan, que el tribunal responsable dejó de lado su obligación de escuchar sus argumentos, y expuso en la sentencia un video del cual no se les informó.

Del mismo modo refieren, que el nueve de agosto pasado, presentaron ante el citado tribunal, solicitud de aclaración de sentencia con la finalidad de que se les explicara el origen de lo determinado en la resolución combatida, por no existir congruencia con lo manifestado y solicitado por el citado instituto político.

B) Que se eliminen de la resolución impugnada, las alusiones personales, calificativos y descripciones que alegan les afectan en su desempeño laboral y profesional, pues consideran que la resolución combatida violenta sus derechos humanos, en la medida en que afecta su honorabilidad, imagen pública y dignidad, al frente de los órganos que representan, es decir, como consejeras y consejeros integrantes del Consejo General y del Consejo Municipal de Mulegé, ambos del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.

5. SOBRESEIMIENTO (PRETENSIÓN A)

Esta Sala Regional advierte que, con independencia de cualquier otra, en el presente se actualiza parcialmente la causal de sobreseimiento hecha valer por el Tribunal responsable, y prevista en el numeral 10, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,⁶ en relación con el diverso artículo 9, párrafo 3 de dicha ley, consistente en que la parte actora carece de legitimación para interponer el juicio, en cuanto a la primera de las pretensiones antes citadas -A)-.

5.1. Falta de legitimación de los integrantes del Consejo Municipal Electoral de Mulegé

Como sostiene la responsable, carecen de legitimación activa para promover cualquiera de los medios de impugnación previstos por la ley adjetiva en la materia, quienes han formado parte de una relación jurídico-procesal como autoridad u órgano partidista responsable, es decir, como sujeto pasivo.

En ese sentido, se tiene que la legitimación activa consiste en la aptitud o circunstancia especial que la ley otorga a una persona para ser parte, en calidad de demandante, en un juicio o proceso determinado, la cual deriva por regla, de la existencia de un derecho sustantivo, atribuible al sujeto que acude por sí mismo o por conducto de su representante, ante el órgano jurisdiccional competente, a exigir la satisfacción de una pretensión.

Así, la legitimación activa constituye un requisito indispensable de procedibilidad o presupuesto procesal,

⁶ En adelante Ley de Medios o ley adjetiva.

para que se pueda iniciar un nuevo juicio o proceso, de manera que la falta de esta torna improcedente el juicio o recurso de que se trate, lo que genera a su vez el desechamiento de la demanda respectiva o bien, su sobreseimiento una vez admitido.

Tratándose del sistema de medios de impugnación en materia electoral, la estructura constitucional y legal de este, en el ámbito federal como local, está orientada a la defensa de los derechos político-electorales de los ciudadanos, tanto en su forma individual como colectiva, cuando han ejercido su derecho de asociación en la creación de agrupaciones políticas o de partidos políticos.

Lo anterior cobra relevancia en el particular, en virtud a que el referido sistema de medios de impugnación en materia electoral federal, no otorga legitimación a los órganos de autoridad para promover medios de impugnación, cuando han sido el ente responsable o demandado en el medio de impugnación regulado por la legislación local, esto es, que las autoridades electorales no están facultadas para cuestionar, mediante la interposición de algún juicio o recurso en la materia, aquellas resoluciones dictadas en litigios donde hubiesen participado como responsables.

En efecto, ha sido criterio de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que cuando una autoridad electoral estatal o municipal participó en una relación jurídico procesal como sujeto pasivo, demandado o responsable, de conformidad con el sistema de medios de impugnación federal carece de legitimación activa para impugnarlo a través de la promoción de un juicio o la interposición de un recurso, razonamiento que dio origen a la jurisprudencia

4/2013, de rubro: LEGITIMACIÓN ACTIVA. LAS AUTORIDADES QUE ACTUARON COMO RESPONSABLES ANTE LA INSTANCIA JURISDICCIONAL ELECTORAL LOCAL, CARECEN DE ELLA PARA PROMOVER JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL,⁷ que resulta aplicable en el presente caso.

De acuerdo a lo expuesto, María Socorro Villavicencio Rojas, María Herlinda Gutiérrez Osuna, Alma Angelina Colorado Betanzos, Víctor Manuel Ceseña Gerardo y José Cruz Villavicencio Aguilar, como integrantes del Consejo Municipal Electoral de Mulegé del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, carecen de legitimación activa para interponer el presente, en cuanto a la pretensión enlistada como A), conforme a lo siguiente.

En primer orden, respecto al carácter de consejeras y consejeros que ostentan los impetrantes, se tiene que estos pretenden defender los intereses del Consejo Municipal, quien fungió como autoridad responsable ante la instalación jurisdiccional estatal, lo que se advierte de su escrito de demanda, del que se destaca el siguiente argumento:

*...no existió la oportunidad de que el juzgador tuviese una clara y precisa información de las partes al omitir dar a la autoridad la garantía de audiencia al exponer en la sentencia un video del cual no se informó, dejando de lado la obligación de escuchar los argumentos de las partes involucradas...*⁸

⁷ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 12, 2013, páginas 15 y 16.

⁸ Foja 23 de actuaciones.

Argumento que evidencia su naturaleza de autoridad primigeniamente responsable y por ende, en atención a jurisprudencia 4/2013 antes destacada, no les asiste legitimación activa para promover válidamente un medio de impugnación federal, en cuanto a la pretensión identificada como A), en contra de un juicio local en el que haya formado parte de la relación jurídico-procesal como autoridad responsable, es decir, como sujeto pasivo.

5.2. Falta de legitimación de la Consejera Presidenta del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur

En la especie, se tiene que en el juicio local cuya resolución interlocutoria ahora se combate, fueron parte en el procedimiento:

PARTE	
ACTORA	Partido Acción Nacional
TERCERA INTERESADA	Partido Nueva Alianza
AUTORIDAD RESPONSABLE	Consejo Municipal Electoral de Mulegé del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur

Asimismo, se tiene que la resolución interlocutoria que ahora se combate, resolvió parcialmente fundada la realización de un nuevo escrutinio y cómputo de la votación de cuatro casillas instaladas en el Municipio de Mulegé, Baja California Sur,⁹ para lo cual, el tribunal responsable vinculó al Instituto Estatal Electoral de esa Entidad, a fin de que, una vez notificada dicha resolución, instruyera al Consejo Municipal de Mulegé para que otorgara todas las facilidades y el apoyo necesario para llevar a cabo las diligencias correspondientes

⁹ Punto resolutivo único de dicha resolución, visible a foja 115 del cuaderno accesorio uno de este expediente.

a nuevo escrutinio y cómputo, así como para que designara personal de auxilio para el propio tribunal estatal.

De lo anterior se desprende, en primer orden, que Rebeca Barrera Amador, quien comparece ante esta Sala Regional ostentándose como Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, no fue parte en el juicio de inconformidad dentro del cual se dictó la sentencia hoy controvertida, de manera que, por lo que hace a la pretensión identificada como A) del apartado anterior, de conformidad con el artículo 88 de la Ley de Medios, carece de legitimación para combatir la sentencia aquí impugnada.

Igualmente, si bien se vinculó al Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, presidido por la referida ciudadana, a realizar determinado acto mediante la resolución que aquí se combate, cierto es también que ello, en forma alguna se traduce en una carga o imposición que le afecte en lo individual o como representante del órgano que encabeza, de modo que se justifique su legitimación en el presente, respecto a la primera de las pretensiones enlistadas.

Contrario a ello, como se desprende de la jurisprudencia 31/2002¹⁰ de este tribunal, cuyo criterio resulta aplicable por analogía en la especie, las sentencias de esta autoridad y las de los órganos jurisdiccionales electorales locales-, obligan a todas las autoridades -dentro de su respectivo ámbito (estatal o federal)-, independientemente de que

¹⁰ De rubro: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS ELECTORALES. LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A ACATARLAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO TENGAN EL CARÁCTER DE RESPONSABLES, CUANDO POR SUS FUNCIONES DEBAN DESPLEGAR ACTOS PARA SU CUMPLIMIENTO. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 30.

figuren o no con el carácter de responsables, sobre todo, si en virtud de sus funciones, les corresponde desplegar actos tendentes a cumplimentar aquellos fallos, de ahí que no se advierta la posible afectación en detrimento de tal funcionaria, que satisfaga la legitimación que aduce para comparecer al presente en representación del Instituto Estatal en comento.

5.3. Conclusión (pretensión A)

En mérito de las anteriores consideraciones, los integrantes del Consejo Municipal de Mulegé, Baja Californian Sur, carecen de legitimación activa para controvertir la resolución del tribunal local que aquí se examina; lo anterior, toda vez que formaron parte de la relación jurídico-procesal en el juicio de origen como autoridad responsable.

Asimismo, el hecho de que el fallo controvertido el tribunal electoral local, haya vinculado al Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, a fin de que instruyera al Consejo Municipal de Mulegé para otorgar todas las facilidades y el apoyo necesario para la realización de un nuevo escrutinio y cómputo, así como para que designara personal de auxilio para el propio tribunal estatal, en forma alguna se traduce en una imposición que escape de las obligaciones que como autoridad tienen tales órganos electorales, ni mucho menos se trata de una imposición o carga de forma personal e individual a la Consejera Presidenta del Consejo General del organismo público electoral de la entidad, ni a las consejeras y consejeros integrantes del Consejo Municipal en cita.

En consecuencia, conforme a las consideraciones expuestas, esta Sala estima como se adelantó, que el

presente juicio electoral debe sobreseerse en cuanto a la pretensión enlistada en el apartado anterior como A), por no asistir a los promoventes legitimación activa, en cuanto a la vulneración de la garantía de audiencia de las autoridades en comento.

6. SE DESESTIMA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA O SOBRESEIMIENTO (PRETENSIÓN B)

Del informe circunstanciado antes citado, se advierte que la causal de improcedencia o sobreseimiento invocada por el tribunal responsable, consistente en la falta de legitimación e interés de los promoventes, no se actualiza por lo que hace a la pretensión enlistada como B), conforme a lo siguiente.

Lo anterior, toda vez que contrario a lo que afirma la responsable, la resolución interlocutoria que ahora se combate, sí trasciende a la esfera de derechos en lo individual de los aquí actores, incluso al de la Consejera Presidenta del Instituto Electoral de la Entidad.

Ello es así, en virtud a que si bien la sentencia interlocutoria combatida resolvió en el fondo, parcialmente fundada la realización de un nuevo escrutinio y cómputo de la votación de cuatro casillas instaladas en el Municipio de Mulegé, Baja California Sur,¹¹ para lo cual, dicho órgano colegiado tan solo vinculó al Instituto Estatal Electoral de esa Entidad, a fin de que, una vez notificada dicha resolución, instruyera al Consejo Municipal de Mulegé para que otorgara todas las facilidades y el apoyo necesario para llevar a cabo las diligencias correspondientes a nuevo escrutinio y cómputo,

¹¹ Punto resolutivo único de dicha resolución, visible a foja 115 del cuaderno accesorio uno de este expediente.

así como para que designara personal de auxilio para el propio tribunal estatal.

Cierto es también, que del escrito de demanda de los promoventes se advierte que estos acuden ante esta instancia federal para solicitar se eliminen de la resolución impugnada las alusiones personales, calificativos y descripciones que alegan afectan su desempeño laboral y profesional en el ámbito electoral -pretensión B)-, al tratarse de integrantes de una autoridad administrativa en la materia, de ahí que esta Sala Regional estima que la causal de improcedencia o sobreseimiento invocada debe desestimarse, pues en cuanto a tal pretensión, los actores sí cuentan con legitimación suficiente para interponer el presente juicio electoral.

Ello, pues no comparecen a combatir los actos que les fueron ordenados o a los que se les vinculó con motivo del nuevo escrutinio y cómputo, sino que alegan una posible vulneración a su honorabilidad, imagen pública y dignidad en su labor como titulares del Consejo General y del Consejo Municipal de Mulegé, ambos del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, con lo que queda de relieve la legitimación e interés que les asiste respecto a la pretensión identificada como B) en la presente sentencia.

7. REQUISITOS DE PROCEDENCIA (PRETENSIÓN B)¹²

El medio de impugnación, respecto a la pretensión enlistada como B), reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 7, párrafo 1; 8; 9, párrafo 1; 79, párrafo 1 y 80,

¹² En adelante, el estudio realizado por esta Sala corresponde a la pretensión identificada B), atento a lo expuesto en los considerandos 5 y 6 de esta ejecutoria.

párrafo 1, inciso f), de la Ley de Medios, como enseguida se corrobora:

7.1. Forma. La demanda fue presentada por escrito ante la autoridad responsable, haciéndose constar el nombre y firma autógrafa de los actores, se identifica el acto reclamado, los hechos en que se basa la impugnación y los conceptos de agravios que la resolución a su juicio les genera.

7.2. Oportunidad. Se estima satisfecho este requisito, toda vez que la resolución interlocutoria impugnada fue emitida el seis de agosto pasado, mientras que el escrito que dio origen al presente juicio fue promovido el nueve siguiente, de ahí que la demanda se tenga por presentada dentro del plazo de cuatro días previsto en el artículo 8 de la Ley de Medios.

7.3. Legitimación e interés jurídico. El juicio es promovido por parte legítima, toda vez que los demandantes comparecen por su propio derecho, como integrantes del Consejo General y del Consejo Municipal de Mulegé, ambos del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, a impugnar una determinación dictada por el tribunal electoral de dicha entidad, dentro de un juicio de inconformidad, misma que refieren afecta su esfera de derechos -conforme a lo razonado con antelación-, lo que resulta suficiente, como requisito de procedibilidad, para tener por satisfechos en principio, la legitimación e interés jurídico para controvertir el acto aquí impugnado.

7.4. Definitividad. Se cumple este requisito, en razón de que no se advierte algún juicio o recurso diverso al presente, por el cual pueda ser impugnada la determinación controvertida.

En esa tesitura, al estar satisfechos los requisitos del juicio que se resuelve respecto a la pretensión enlistada como B), y no advertirse, la actualización de alguna causal de improcedencia o de sobreseimiento, se procede al estudio de fondo de los agravios planteados.

8. ANÁLISIS DEL *AMICUS CURIAE*

Silvia Zulema Cota G. y otras, por su propio derecho, y a través de la Red para la Igualdad Sustantiva de Baja California Sur (RMIS) comparecen con la finalidad de *que se analice el caso presentado por las actoras en el expediente SRG-JE-27-2018*.¹³

Amicus curiae es una figura jurídica adoptada por tanto por diversos tribunales internacionales,¹⁴ como por las Salas de este Tribunal Electoral, quienes han adoptado el criterio de que los argumentos planteados en el escrito no son vinculantes, pero implican una herramienta de participación en un Estado democrático de derecho, para allegar de conocimientos especializados a los órganos jurisdiccionales sobre aspectos de interés y trascendencia en la vida política y jurídica de una Nación.

En ese sentido, la Sala Superior de este órgano ha considerado que, tratándose de la sustanciación de los medios de impugnación en materia electoral en que la litis es relativa al resguardo de principios constitucionales o convencionales,¹⁵

¹³ Foja 372 de autos.

¹⁴ Entre ellos el Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

¹⁵ Entre otros, en cuestiones que se relacionen con el respeto, la protección y la garantía de los derechos fundamentales como igualdad de género y no discriminación, libertad de expresión, equidad y permanencia efectiva de los cargos de elección popular, o bien respecto a ciertos grupos históricamente discriminados como, por ejemplo, grupos indígenas.

es factible la intervención de terceros ajenos al juicio, a través de la presentación de escritos con el carácter de *amicus curiae*, a fin de contar con mayores elementos para un análisis integral del contexto de la controversia.

Incluso, como se desprende de la jurisprudencia 8/2018, la figura *amicus curiae* se torna una herramienta de participación ciudadana en el marco de un Estado democrático de derecho.¹⁶

Dadas esas circunstancias, los escritos en cuestión serán admitidos para su análisis referencial, a partir de los elementos fácticos o conocimientos especializados que aporten¹⁷ a la controversia de que se trate, sin que al amparo de tales escritos, resulte válida la ampliación de la *litis* planteada.

9. SÍNTESIS DE AGRAVIOS Y ORDEN DE ESTUDIO

En virtud de que no existe disposición legal que lo exija, se omite la transcripción de los agravios que formula la parte accionante, señalándose a continuación, y a partir de la lectura integral del escrito de demanda, una síntesis de tales motivos de disenso:

¹⁶ De rubro: AMICUS CURIAE. ES ADMISIBLE EN LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

¹⁷ Ya sean sobre una ciencia o técnica, que sean ajenos a este órgano jurisdiccional, pero pertinentes para una mejor toma de decisión judicial o por que aporten documentación o manifestaciones idóneas de las que se adviertan que cuentan con la experiencia o pericia para aportar dichos elementos o conocimientos al órgano jurisdiccional, como lo ha sostenido la Sala Superior de este Tribunal al resolver los expedientes SUP-JDC-208/2018 y SUP-RAP-719/2017.

I. Que la resolución combatida violenta sus derechos humanos, pues alegan que lo señalado respecto a la falta de certeza, así como las alusiones personales y calificativos empleados en su redacción, afectan su honorabilidad, calidad moral, imagen pública y dignidad, al frente de los órganos que representan, es decir, como consejeras y consejeros integrantes del Consejo General y del Consejo Municipal de Mulegé, ambos del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.

II. Que los calificativos personales se dirigen directa y únicamente hacia las mujeres, señalando nombre y cargo de las mismas, sin hacer señalamiento directo a ninguno de los demás Consejeros electorales, por lo que se observa una violencia de género, basada en estereotipos y la falta de respeto a la dignidad de las mujeres.

Asimismo, el estudio de dichos motivos de reproche se realizará en el orden en que fueron enlistados en la síntesis anterior, sin que ello depare perjuicio a la parte accionante, ya que lo trascendente es que se haga un estudio exhaustivo de sus agravios sin importar el orden o forma en que se analicen.

10. ESTUDIO DE FONDO

10.1. Caso concreto

Las autoridades electorales, tanto jurisdiccionales como administrativas, deben velar por la observancia irrestricta de los principios rectores de la materia, es decir, por la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y

objetividad, para lo cual gozaran de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones.

Del mismo modo, deberán observar y vigilar el adecuado funcionamiento del órgano que integren, al igual que los titulares de cada una de estas autoridades, habrán de vigilar que su actuación al frente de tales instituciones de la democracia, sea acorde y fortalezca los principios rectores de la función.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7, 8, fracción III, 19, fracción II, de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, el Instituto Estatal Electoral la entidad, como depositario de la autoridad electoral en la entidad, y responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones, tiene entre sus fines el de contribuir al desarrollo de la vida democrática, para lo cual deberá establecer los vínculos entre este y otras autoridades, a efecto de que, en sus respectivos ámbitos de competencia, colaboren con el instituto para el cumplimiento de sus objetivos.

En cuanto al Tribunal Estatal Electoral de la entidad en comento -según establece el artículo 3, de su Reglamento Interno-, como órgano jurisdiccional especializado en la materia, goza entre otros, de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.

Asimismo, de conformidad con lo anterior, así como en atención al Código Modelo de Ética Judicial Electoral, sus actuaciones judiciales electorales deben observar el mayor respeto hacia las partes, de ahí que sea deber de los juzgadores, expresar y dar a conocer sus decisiones y

resoluciones en un lenguaje jurídico claro y libre de expresiones que atenten contra el derecho y reputación de las personas.

10.2.1. Agravio I

En ese contexto, el agravio identificado como I resulta **sustancialmente fundado** y suficiente para modificar la resolución interlocutoria combatida, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen.

A juicio de esta Sala Regional, para la resolución del asunto de fondo de la sentencia interlocutoria materia de controversia, resultan innecesarios los calificativos empleados, en la medida en que se alejan de la estricta resolución del punto de derecho que les fue planteado, y por ende, resultan prescindibles para el fondo de la determinación a que se arribó en la sentencia aquí combatida.

En efecto, **tratándose de resoluciones judiciales**, se tiene que estas deben de ceñirse a resolver mediante un lenguaje jurídico y neutral, el punto jurídico que es sometido a consideración de los juzgadores, toda vez que sus decisiones y resoluciones deben ser plenamente identificables con el derecho y las sanas prácticas, si se considera que la consolidación democrática, requiere entre otras cuestiones, de relaciones interinstitucionales regidas por el respeto de la función ajena.

Esto, pues solo así es exigible para las autoridades administrativas, las agrupaciones y partidos políticos, litigantes, así como para la ciudadanía en general, el respeto

a los principios de la función y a los derechos de las personas.

En ese sentido, se tiene que la sentencia hoy combatida, tuvo por objeto jurídico, dilucidar la procedencia o no respecto a la realización de un nuevo escrutinio y cómputo en relación a diversas casillas instaladas en el Municipio de Mulegé, Baja California Sur, pretensión que fue declarada parcialmente fundada por el tribunal responsable, con base en las declaraciones y determinaciones realizadas por los ahora actores en su calidad de consejeras y consejeros electorales -mismas cuya realización no se encuentra controvertida en el presente-, así como a las particularidades de las casillas cuyo nuevo escrutinio y cómputo se solicitó.

Asimismo, es un hecho no controvertido que los hoy impetrantes ejercen los cargos de consejeras y consejeros integrantes del Consejo General y del Consejo Municipal de Mulegé, ambos del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, y que como tales, se trata de funcionarios electorales que actúan bajo el principio de buena fe.

Ahora bien, aun cuando las declaraciones y determinaciones realizadas por los accionantes, en el ejercicio de su función como integrantes de autoridades administrativas electorales locales, fueron parte de los elementos considerados por el tribunal responsable para sostener el fallo aquí impugnado, lo cierto es que, a juicio de esta Sala Regional, los calificativos empleados en torno al desempeño de los promoventes como servidores públicos, van más allá del aspecto jurídico a dilucidar y de la materia propia de la *litis* a que debió constreñirse a determinar, es decir, si era

procedente o no un nuevo escrutinio y cómputo, en el municipio de que se trata.

Habida cuenta que, los calificativos personales no son la bases jurídicas para resolver el aspecto incidental planteado, así como trascienden en la credibilidad e imagen de los funcionarios aludidos, lo que repercute notoriamente en el ejercicio de sus funciones; ello, pues su labor como funcionarias y funcionarios electorales precisa del respeto y el fortalecimiento interinstitucional.

En consecuencia, a partir del reconocimiento de la libertad de criterio e independencia para resolver los asuntos que les son sometidos a su consideración, de la que gozan los juzgadores, en relación con su obligación de observar un riguroso apego a la justicia y el derecho en el dictado de sus sentencias, así como en atención al respeto que precisa la función electoral, la imagen de quienes la ejercen y la importancia de fomentar relaciones interinstitucionales sanas, procede ordenar la modificación de la sentencia interlocutoria combatida, testándose los párrafos que aluden a calificativos personales.

10.2.2. Agravio II

Ahora bien, por lo que hace al agravio identificado como **II**, en torno a una posible violencia de género, el mismo resulta **infundado**, pues de la redacción de la sentencia interlocutoria controvertida, no se advierte, que los calificativos empleados por el tribunal responsable se hayan basado en elementos de género, estereotipos o agresiones orientadas a las impetrantes por ser mujeres.

Ello pues las referencias que hace el tribunal responsable a las consejeras presidentas tanto del Consejo General como del Consejo Municipal de Mulegé, ambos del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, se advierten orientadas a su carácter de titulares de dichos órganos, no así a su condición de mujeres, lo que se robustece ante el hecho de que el referido consejo municipal, cuenta en su integración con otras dos mujeres -además de su presidenta-, sin que en la resolución combatida se haga alusión a estas en lo particular, sino tan solo al consejo municipal en su conjunto, integrado también con hombres.

De ahí que no se tenga por acreditado el primer elemento¹⁸ indispensable para considerar que un acto constituye violencia de género, así como que se esté ante un acto de violencia política en contra de las mujeres por razón de género,¹⁹ pues se insiste, los calificativos empleados por el

¹⁸ Conforme al Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, son dos los elementos indispensables para considerar que un acto de violencia se basa en el género:

1. Cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer. Es decir, cuando las agresiones están especialmente orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujer y por lo que representan en términos simbólicos, bajo concepciones basadas en estereotipos. Incluso, muchas veces el acto se dirige hacia lo que implica lo “femenino” y a los roles que normalmente se asignan a las mujeres.
2. Cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres; esto es, a) cuando la acción u omisión afecta a las mujeres de forma diferente que a los hombres o cuyas consecuencias se agravan ante la condición de ser mujer; y/o b) cuando les afecta en forma desproporcionada. Este último elemento se hace cargo de aquellos hechos que afectan a las mujeres en mayor proporción que a los hombres. En ambos casos, habrá que tomar en cuenta las afectaciones que un acto de violencia puede generar en el proyecto de vida de las mujeres.

El resaltado es propio.

¹⁹ El citado protocolo a su vez refiere, que para identificar la violencia política en contra de las mujeres en razón de género, es necesario verificar que estén presentes los siguientes cinco elementos:

1. El acto u omisión se base en elementos de género, es decir: i. se dirija a una mujer por ser mujer, ii. tenga un impacto diferenciado y desventajoso en las mujeres; y/o iii. las afecte desproporcionadamente.
2. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.
3. Se dé en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público, (sin importar el hecho de que se manifieste en el ámbito público o privado, en la esfera política, económica, social, cultural, civil, etcétera; tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en

tribunal responsable en torno a la actuación de las y los promoventes, no se advierten basados en elementos de género, estereotipos o agresiones orientadas exclusivamente a las impetrantes mujeres en razón de su género.

En relación a las manifestaciones que se desprenden del escrito *amicus curiae* presentado en relación al presente juicio; sin embargo, no pueden ser objeto de análisis pormenorizado, ya que ello implicaría una indebida ampliación de la *litis*.

En efecto, la *litis* en los medios de impugnación se integra únicamente con el acto reclamado y los planteamientos o agravios expuestos por la parte actora para demostrar su ilegalidad, de manera que corresponde a la parte accionante combatir las consideraciones de la responsable a efecto de demostrar que son contrarias a derecho, ilegales o incorrectas, exponiendo razonamientos que controviertan tal actuación.

En ese contexto, los argumentos o planteamientos que expongan los terceros interesados, los coadyuvantes o las personas ajenas al juicio, incluso los que comparezcan mediante la figura *amicus curiae*, y que vayan más allá de la *litis*, no pueden ser tomados en cuenta al momento de emitirse el fallo correspondiente.

cualquier relación interpersonal, en la comunidad, en un partido o institución política).

4. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico.
5. Sea perpetrado por cualquier persona o grupo de personas -hombres o mujeres-, en particular: integrantes de partidos políticos, aspirantes, precandidatos(as), candidatos(as) a cargos de elección popular o de dirigencia partidista; servidores(as) públicos(as), autoridades gubernamentales, funcionarios(as) o autoridades de instituciones electorales; representantes de medios de comunicación; el Estado o sus agentes.

El resaltado es añadido.

Se afirma lo anterior, en virtud a que la Ley de Medios impide expresamente esta circunstancia, lo que se advierte de la redacción de su artículo 12, numeral 3, inciso a), que refiere que el coadyuvante no puede manifestar conceptos que amplíen o modifiquen la controversia planteada en el medio de impugnación, lo que resulta acorde a lo sostenido por este Tribunal Electoral respecto a la intervención del tercero interesado, quien del mismo modo, no puede variar la integración de la *litis*, toda vez que de las disposiciones que integran la Ley de Medios, no se aprecia alguna que faculte o permita a los ciudadanos o a los partidos políticos con intereses opuestos a los del accionante, a reconvenir o contrademandar al promovente.²⁰

En esa tesitura, es obvio que los sujetos ajenos al juicio, por mayoría de razón, tampoco pueden ampliar la *litis*, de ahí que, en los medios de impugnación no resulta válido que pueda ampliarse ni modificarse la materia del litigio conformada por la demanda y el acto o resolución impugnada, o bien, plantearse nuevas situaciones litigiosas, pues se insiste, la figura *amicus curiae*, se trata de una persona o institución ajena al litigio y al proceso, por lo que los razonamientos que se aparten de la controversia planteada, no se pueden entender como agravios o motivos de queja susceptible de un diverso análisis, así como tampoco y en ningún caso, un escrito de esa naturaleza puede ser valorado como un elemento probatorio

²⁰ Criterio sostenido en la tesis XXXI/2000: “TERCEROS INTERESADOS. SÓLO TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA COMBATIR LAS DECISIONES QUE AFECTEN LOS BENEFICIOS QUE LES REPORTAN LOS ACTOS IMPUGNADOS POR EL ACTOR.” Así como en los expedientes SUP-JRC-331/2000 y el SUP-REP-31/2016.

propiamente, como lo ha sostenido la Sala Superior de este órgano jurisdiccional.²¹

En efecto del escrito *amicus curiae* presentado en el presente se advierte, que quienes lo interponen solicitan incluso se recaben diversos medios de convicción, del mismo modo que pretenden ampliar la *litis*, respecto de temas y actos que no fueron planteados ni controvertidos por los aquí accionantes, es decir, que se agregan temas novedosos que no fueron referidos en forma alguna en la demanda ante esta instancia, de ahí que, al no formar parte de la *litis*, los planteamientos novedosos y ajenos al presente, esgrimidos en el escrito de *amicus curiae* no pueden servir de base para modificar o ampliar la controversia aquí planteada.

En tal virtud, resultan convenientes los siguientes

11. EFECTOS

11.1. Se **ordena** al Tribunal Electoral del Estado de Baja California Sur, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación de la presente, **modifique** la sentencia interlocutoria combatida,²² única y exclusivamente a efecto de que se testen²³ de esta, los párrafos que aluden a calificativos personales, para quedar en su lugar, lo siguiente:

²¹ Al resolver el SUP-REC-206/2018.

²² Y a la que sobrevino un incidente de aclaración de sentencia, al que recayó su sobreseimiento el doce de agosto de dos mil dieciocho. Visible a fojas 117 a 122 del cuaderno accesorio uno, y en: <http://teebcs.org/wp-content/uploads/2014/12/TEE-BCS-JI-014-2018-ACLARACION-DE-SENT.-12-DE-AGOSTO.pdf>

²³ En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Por tanto, la pretensión del Partido Acción Nacional en Baja California Sur es garantizar el Principio de Certeza, como principio rector de la materia electoral y que deben observar las autoridades electorales. (Primer párrafo de la foja diecinueve de la sentencia interlocutoria combatida).

TESTADO EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DICTADA EL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO EN EL EXPEDIENTE SG-JE-27/2018.

TESTADO EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DICTADA EL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO EN EL EXPEDIENTE SG-JE-27/2018.

TESTADO EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DICTADA EL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO EN EL EXPEDIENTE SG-JE-27/2018.

TESTADO EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DICTADA EL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO EN EL EXPEDIENTE SG-JE-27/2018.

TESTADO EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DICTADA EL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO EN EL EXPEDIENTE SG-JE-27/2018. Así, este órgano jurisdiccional estima que, TESTADO EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DICTADA EL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO EN EL EXPEDIENTE SG-JE-27/2018. ya que la autoridad responsable en un primer momento asumió la decisión de un recuento total y posteriormente atendió la decisión generada por autoridad electoral diversa sobre la determinación de recuento

TESTADO EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DICTADA EL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO EN EL EXPEDIENTE SG-JE-27/2018.

TESTADO EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DICTADA EL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO EN EL EXPEDIENTE SG-JE-27/2018.

En tales condiciones, este órgano jurisdiccional determina que serán materia de análisis y estudio las casillas señaladas por el promovente,²⁴ con excepción de la casilla 83 Extraordinaria 1 Contigua 1(...) [Continúa el segundo párrafo de la foja veintiuno de la resolución combatida en los términos originales y sus sucesivos].

11.2. Se **ordena** al Tribunal Electoral del Estado de Baja California Sur, para que testada en los términos anteriores, dentro del mismo plazo antes concedido, sustituya de su página de internet, como del expediente TEE-BCS-JI-014/2018-, la resolución interlocutoria combatida, dictada el seis de agosto de dos mil dieciocho, en los términos mandados conforme al punto que antecede.

11.3. Realizado lo anterior, el referido órgano jurisdiccional responsable deberá **informar** a esta Sala Regional del cumplimiento dado a la presente sentencia, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra.

En consecuencia, esta Sala Regional

R E S U E L V E

²⁴ Lo subrayado corresponde al inicio del segundo párrafo de la foja 21 de la sentencia interlocutoria combatida.

PRIMERO. Se **sobresee** parcialmente el presente juicio, de acuerdo a lo expuesto en esta ejecutoria.

SEGUNDO. Se **modifica** el acto impugnado, conforme a los efectos previstos en esta sentencia.

Notifíquese en términos de ley.

En su oportunidad, devuélvanse las constancias que procedan y archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvieron por **unanimidad** de votos, la Magistrada Presidenta y los Magistrados integrantes de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con voto concurrente del Magistrado Jorge Sánchez Morales ante la Secretaria General de Acuerdos quien autoriza y da fe.

**GABRIELA DEL VALLE PÉREZ
MAGISTRADA PRESIDENTA**

**EUGENIO ISIDRO GERARDO
PARTIDA SÁNCHEZ
MAGISTRADO**

**JORGE SÁNCHEZ MORALES
MAGISTRADO**

**OLIVIA NAVARRETE NAJERA
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS**

VOTO CONCURRENTENTE QUE FORMULA EL MAGISTRADO JORGE SÁNCHEZ MORALES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN LA SENTENCIA RECAÍDA EN EL JUICIO ELECTORAL SG-JE-27/2018.

Con el debido respeto para mis compañeros Magistrados integrantes de esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, me permito formular voto concurrente porque si bien concuerdo con las razones que fundamentan el sentido de la sentencia, disiento de la decisión aprobada por mayoría en cuanto a los puntos 11.1 y 11.2, del apartado de efectos de la sentencia recaída al juicio electoral SG-JE-27/2018.

En los puntos 11.1 y 11.2, del considerando relativo a los “efectos”, se determina expresamente lo siguiente:

11.1. Se ordena al Tribunal Electoral del Estado de Baja California Sur, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación de la presente **modifique** la sentencia interlocutoria combatida, única y exclusivamente a efecto de que se ***testen de esta, los párrafos que aluden a calificativos personales, para quedar en su lugar lo siguiente:***

Por tanto, la pretensión del Partido Acción Nacional en Baja California Sur es garantizar el Principio de Certeza, como principio rector de la materia electoral y

que deben observar las autoridades electorales.
(Primer párrafo de la foja diecinueve de la sentencia interlocutoria combatida).

TESTADO EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DICTADA EL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO EN EL EXPEDIENTE SG-JE-27/2018.

TESTADO EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DICTADA EL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO EN EL EXPEDIENTE SG-JE-27/2018.

TESTADO EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DICTADA EL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO EN EL EXPEDIENTE SG-JE-27/2018.

TESTADO EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DICTADA EL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO EN EL EXPEDIENTE SG-JE-27/2018.

TESTADO EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DICTADA EL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO EN EL EXPEDIENTE SG-JE-27/2018.

Así, este órgano jurisdiccional estima que, **TESTADO EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DICTADA EL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO EN EL EXPEDIENTE SG-JE-27/2018**, ya que la autoridad responsable en un primer momento asumió la decisión de un recuento total y posteriormente atendió la decisión generada por una autoridad electoral diversa sobre la determinación de recuento **TESTADO EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO**

POR LA SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DICTADA EL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO EN EL EXPEDIENTE SG-JE-27/2018.

TESTADO EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DICTADA EL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO EN EL EXPEDIENTE SG-JE-27/2018.

[...]

11.2. Se ordena al Tribunal Electoral del Estado de Baja California Sur, *para que testada en los términos anteriores, dentro del mismo plazo antes concedido, sustituya de su página de internet, como del expediente TEE-BCS-JI-014/2018, la resolución interlocutoria combatida*, dictada el seis de agosto de dos mil dieciocho, en los términos mandados conforme al punto que antecede.

Lo resaltado corresponde a esta Ponencia.

En los puntos de efectos antes transcritos se desprende que esta Sala ordena al Tribunal Electoral de Baja California Sur que de la sentencia interlocutoria dictada el seis de agosto de este año, se testen los párrafos que aluden a calificativos personales dirigidos en contra de la Consejera Presidenta del Instituto Electoral de esa entidad federativa, así como a los integrantes el Consejo Municipal de Mulegé, en los términos que se precisan en la misma suprimiendo el contenido de los párrafos de referencia.

No comparto lo resuelto por la mayoría, porque la orden de testar algunos párrafos de la sentencia interlocutoria dictada por el Tribunal Electoral de Baja California Sur en los términos ordenados implica alterar o modificar sustancialmente un **documento que fue emitido y aprobado por los integrantes de dicho tribunal en ejercicio de sus atribuciones** y que surtió

sus efectos frente a las partes en conflictos y demás interesados.

En mi opinión, la orden de esta Sala de que se testen algunos párrafos de la sentencia interlocutoria impugnada debe ajustarse a lo previsto en el artículo 272, del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual indica que **no se emplearán abreviaturas, ni se rasparán las frases equivocadas, sobre las que solo se pondrá una línea delgada, salvándose con toda precisión el error cometido.**

En este asunto, se debiera testar con una línea delgada los párrafos que tienen alusiones personales contra los actores, señalando que lo testado no tienen valor.

En el supuesto que de testar la sentencia de referencia en los términos previstos por el artículo 272 antes citado, generara confusión o violentara los derechos de las autoridades responsables, se está en posibilidad de generar en términos de la ley de transparencia una versión pública, en la que se elimine u omitan las partes o secciones de las cuales se ordenó se testaran, como fue aprobado por la mayoría.

Por las razones anteriores, es que considero que no debieron aprobarse los efectos en los términos señalados en el apartado respectivo de la sentencia aprobada por la mayoría.

JORGE SÁNCHEZ MORALES
MAGISTRADO

La suscrita Secretaria General de Acuerdos de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el

artículo 204, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento a las instrucciones de la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, **CERTIFICA:** que el presente folio, con número treinta y seis, forma parte de la sentencia de esta fecha, emitida por esta Sala en el juicio electoral del ciudadano con la clave **SG-JE-27/2018. DOY FE.**-----

Guadalajara, Jalisco, veintitrés de agosto de dos mil dieciocho.

OLIVIA NAVARRETE NAJERA
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS